

Auto Nro. AI-062
Proceso: Verbal
Demandante: Alejandra María Monsalve Uribe
Demandado: Lucía Beatriz Castro Valencia y otros
Radicado: 05001 31 03 022 2019 00291 03
Asunto: Resuelve queja, niega apelación.

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
-SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL-**

Medellín, seis (06) de julio de dos mil veintidós (2022)

I. ANTECEDENTES INMEDIATOS.

1. Mediante auto de 27 de agosto de 2021 el Juzgado Vigésimo Segundo Civil del Circuito de Medellín, resolvió denegar el recurso de apelación sobre la **tacha de falsedad** formulada en contra del documento denominado “*consentimiento informado*” allegado al plenario, lo anterior, por cuanto dicho acto procesal no se enmarcaba en lo establecido en el numeral 3° del artículo 321 del C. G. de P., razón por la cual la parte impetró el recurso de reposición y subsidiario de queja en contra del citado proveído, sin que hallara eco el primero de ellos en virtud a que, según indicó la funcionaria, la tachada de falsedad no constituía un decreto o práctica de prueba, porque se hizo sobre un documento que ya obraba como tal en el expediente, decretado mediante del 30 de abril de 2021 y, por tanto, no fue de un documento que se negó su práctica o su decreto, como para merecer un trámite incidental.

1.2. La parte demandante recurrente insiste en que la negativa a dar trámite a la tachada de falsedad “...se dio con respecto a una prueba y las pruebas sí tienen recurso de apelación y es por eso que se debió haber concedido en esa tachada de documento...” de este modo, la funcionaria de primer grado, ordenó el envío de las diligencias a la corporación, con el propósito de que se decidiera el recurso blandido subsidiariamente.

II. CONSIDERACIONES

1. No es del caso que la Sala decida cuestiones atinentes al auto recurrido, pues el problema a resolver por el Tribunal, como tantas veces

se ha dicho del recurso de queja, no es otro que el de definir si la providencia en cuestión era o no apelable, de conformidad con la norma vigente para el momento en el que se interpuso el recurso.

El propósito del recurso, entonces, no pasa de la eventual concesión de la apelación, cuando el *a quo* erró en la negativa de la alzada. De ahí que la sustentación que la ley le exige a quien eleva este reclamo ha de girar en torno de las razones por las cuales, al contrario de las esgrimidas por el funcionario de primer grado, considera que la providencia sí era apelable.

En el caso presente, el recurso de apelación se promovió contra la decisión del 27 de agosto de 2021, es decir, el rechazo de la tacha de falsedad formulada por la apoderada judicial de la parte demandante, punto frente al cual la togada aduce que por estar vinculada a una prueba es que la tacha debe proceder, no obstante, de entrada, ha de advertirse que esta sala respaldará la determinación de la funcionaria, pues lo cierto es que la providencia de la que disiente no es apelable y menos, en los términos alegados por la parte actora, pues aunque dicha figura se encuentre regulada en el Título Único de Pruebas del Código General del Proceso, esto no desnaturaliza la finalidad que dicha institución proclama, que no es otra, que la de ser un mecanismo para impugnar el valor jurídico otorgado a un documento, concretamente su autoría o autenticidad, es decir, es un trámite accesorio y relacionado con la eventual mendacidad de la prueba aportada, más no es la prueba misma, como lo sugiere la togada.

2. De otro lado, aunque la señora jueza ni la togada lo discutan, debe precisarse que el asunto tampoco encuadra en lo previsto en el numeral 5° del artículo 321 del Código General del Proceso, que tiene como apelable también el auto que “...*que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva...*”. Sabido es, que quien invoca la tacha de falsedad, afirmando que alguien no es el suscriptor de un documento, le corresponde cumplir con los requisitos de sustentación y prueba para desvirtuar la presunción de autenticidad de determinado documento, actitud frente a la cual la vía a seguir es la del incidente, por así exigirlo el artículo 270 *ibídem*.

Nótese que los motivos en que se fundó la tacha, son irrelevantes tan siquiera para sugerir la apertura de un incidente, pues se contraen a solicitar que el documento denominado consentimiento informado sea enviado a la Fiscalía General de la Nación, para que se deduzca por la autoridad penal una falsedad ideológica, no obstante, para ello, la ley le brinda salidas como instaurar la respectiva denuncia penal o, como en su momento lo dijo la señora jueza, ella misma se encargaría de cumplir con el deber de compulsar copias en caso de evidenciar cualquier irregularidad que tipifique un delito, pero, lo cierto es que, parte alguna la togada pretende discutir probatoriamente la autoría o autenticidad del documento a través de un incidente especial, como para entender que el auto es apelable, en el sentido que se ha rechazado de plano un incidente, aspecto que, como se dijo, tampoco constituye el trámite que reclama la recurrente.

3. De acuerdo con lo anterior, para el caso en estudio, se puede concluir que lo resuelto por la jueza de primera instancia fue acertado, por cuanto el auto que niega dar trámite a la tacha de falsedad, en los términos consignados *ut supra*, no es apelable. Y no es susceptible de apelación, por la potísima razón de que no se encuentra dentro de los enlistados en el artículo 321 del C. G. del P., ni en norma especial que así lo contemple, ni tampoco es equivalente a alguno que sí sea apelable.

4. **De la solicitud probatoria.** Por último y en atención a la solicitud de oficiar a la empresa ALLERGAN S.A.S., para que dé respuesta al oficio 243 emitido por el Juzgado de primera instancia, se le recuerda a la parte que debió haberle realizado dicha solicitud al juzgado que libró el oficio y, por supuesto, previo al proferimiento de la respectiva sentencia que puso fin a la primera instancia, pues en este segundo grado de conocimiento el decreto de pruebas es excepcional y su procedencia está restringida a las precisas hipótesis previstas en el artículo 327 del C. G. del P.

De no entenderse así, sería abrirle un camino irregular a la práctica e incorporación de determinada prueba en segunda instancia, siendo que la parte interesada, previamente al fenecimiento de la primera instancia, pudo y debió surtir el **trámite efectivo** tendiente a obtener esa prueba, el que no solo consiste en diligenciar los oficios que libre el juzgado, sino en constatar que

la respuesta se incorporada el expediente y le sea puesta en conocimiento tanto al juez, como a las demás partes, para cumplir con éxito la carga probatoria que por ley le corresponde.

En virtud de las razones expuestas, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, EN SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL,**

III. RESUELVE:

PRIMERO: Se declara bien denegado el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 27 de agosto de 2021 y, por tanto, no prospera el recurso de queja.

SEGUNDO: Denegar la solicitud probatoria elevada por la parte demandante recurrente, conforme lo expuesto en el respectivo acápite motivacional.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
Magistrado